



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: MARÍA YANET AGUDELO GÓMEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 003 2018 00900 01
Sentencia: S-308

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las entidades codemandadas, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 31 de marzo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARÍA YANET AGUDELO GÓMEZ demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar los aportes de la

cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros. Pretende además se condene en costas a las entidades codemandadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 4 de marzo de 1965; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 30 de marzo de 1995; que posteriormente fue visitada por un promotor de ventas de la AFP PORVENIR S.A., quien a través de engaños la indujo en error para que se trasladara de régimen con la promesa de que en esa entidad su pensión sería superior; que se trasladó a esa entidad con la falsa creencia de poder acceder a una pensión de vejez en cualquier tiempo; que en ese momento no le efectuaron una proyección real y acertada según su situación pensional; y que su solicitud para retornar a COLPENSIONES ha sido negada por las entidades demandadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, PORVENIR S.A. acepta únicamente la afiliación de la demandante a esa entidad, aclarando que ese hecho ocurrió en 1997 cuando se vinculó a la AFP COLPATRIA S.A., la cual se produjo en virtud de una decisión libre y voluntaria y según la asesoría suministrada por el asesor de la entidad. Se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto no se configuró vicio alguno en el consentimiento y el formulario fue suscrito de forma autónoma, libre y voluntaria, con conocimiento real del acto jurídico que realizaba y cumpliendo con todos los requisitos exigibles para esa época. Como excepciones propuso prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y enriquecimiento sin causa.

Por su parte, COLPENSIONES acepta la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pero explica que las cotizaciones al ISS las comenzó a realizar el 13 de agosto de 1985; frente a los demás hechos indica que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, imposibilidad de aplicar precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas e inexistencia al pago de intereses moratorios.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, 1) DECLARÓ que la AFP PORVENIR S.A. faltó a su obligación de brindar información veraz, clara y oportuna al demandante al momento de su traslado de régimen; 2) DECLARÓ que COLPENSIONES es un tercero absoluto en ese acto jurídico de traslado de régimen pensional; 3) DECLARÓ que PORVENIR S.A. le causó un perjuicio y daño económico al demandante en su falta de acceso real y efectivo a la seguridad en pensiones; 4) DECLARÓ la ineficacia del traslado de régimen por inaplicación constitucional; 5) DECLARA que PORVENIR S.A. es responsable profesionalmente por la ineficacia de traslado y le ORDENA el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del Régimen de Prima Media una vez le sea solicitada; además, que dentro del mes siguiente realice solicitud a COLPENSIONES con miras a subrogación pensional teniendo en cuenta todo lo necesario para que ésta última pueda asumir en su totalidad el pago de la prestación; 6) ORDENA a COLPENSIONES, que dentro de los dos meses siguientes a la solicitud recibida, elabore cálculo pensional y lo presente a PORVENIR S.A., entidad ésta última que deberá realizar el pago respectivo; 7) AUTORIZAR a PORVENIR

S.A. subrogar la pensión de vejez utilizando los saldos de la cuenta de ahorro individual solo cuando pague el valor del cálculo actuarial; 8) ABSUELVE a COLPENSIONES de todas las pretensiones sin perjuicio del reconocimiento de la obligación de reconocer la pensión con previo pago del cálculo pensional por PORVENIR S.A.; y 9) CONDENA en costas a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, el apoderado de PORVENIR presentó recurso de apelación indicando que no se valoró por parte del despacho el interrogatorio rendido por parte de la demandante donde confesó haber recibido información suficiente para el año 1997 sobre las características propias del RAIS; de igual forma era consciente de los cobros de administración y seguros previsionales; no se valoró que el consentimiento informado para su libre escogencia se materializó con la suscripción del formulario de afiliación conforme lo exigía el art. 114 de la Ley 100 de 1993, la que no se trataba de una simple declaración vacía incluida en un formato de afiliación, sino en un requerimiento legal.

Con la declaratoria de la ineficacia entre regímenes se desconoce el principio de la autonomía de la voluntad privada con que contaba la demandante. Respecto a los perjuicios establecidos por el despacho, no se valoró que estos no están debidamente probados en el proceso porque la afiliación fue de manera libre e informada, además de que la afiliada aún tiene la posibilidad de retornar al RPM por alguna autorización judicial. PORVENIR cumplió con administrar de forma diligente el capital de la demandante.

No existe fundamento fáctico ni jurídico que imponga pago de perjuicios de conformidad con el art. 206 del Código General del Proceso, por cuanto la parte demandante no logró estimar la cuantía;

este debe probarse por naturaleza por la parte demandante y acreditarse dentro del proceso en la oportunidad pertinente.

De considerar que si existe la ineficacia solicita se aplique el precedente de la Corte Suprema de Justicia donde dice que deben retrotraerse las cosas a su estado anterior y quien debe asumir el pago de la pensión es COLPENSIONES.

Precisamente COLPENSIONES también presentó recurso de apelación considerando que no es posible lo que se ordena en la sentencia, así como tampoco declarar la ineficacia, ya que existen 2 regímenes que le dan libre derecho de escogencia a las personas, cada uno con diferentes características, por lo cual considera que no es posible que se pueda llegar a una subrogación pensional como se pretende, ni que se le imponga el tener que realizar cálculos actuariales implicándole un desgaste económico. No encuentra congruencia en lo pedido por la demandante y la sentencia proferida, por lo que solicita se mantenga lo referente a que no pueda retornar al RPM debiendo permanecer en el RAIS.

De declararse la ineficacia y se decida que la demandante debe retornar al RPM, solicita que dicha devolución no se haga únicamente teniendo en cuenta los aportes o los dineros que reposan en su cuenta de ahorro individual, sino incluyendo gastos de administración, rendimientos, valores pagados por seguros, así como cualquier otro tipo de suma que se haya descontado, en razón que el valor que se encuentra en la cuenta no sería suficiente para pagar una pensión bajo el RPM.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, PORVENIR S.A. presentó alegatos de conclusión mediante los cuales insiste en

los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación presentado.

Lo mismo ocurre con la apoderada de COLPENSIONES, quien hace énfasis que de declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional, se debe ordenar la devolución de todos los aportes realizados por la demandante tal y como lo ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, los cuales deben incluir la respectiva indexación.

C O N S I D E R A C I O N E S :

Según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS realizado a la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MARÍA YANET AGUDELO GÓMEZ nació el 4 de marzo de 1965; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 13 de agosto de 1985, acumulando en esa entidad un total de 607 semanas; **iii)** el 14 de abril de 1997 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP COLPATRIA S.A.; y **iv)** el 16 de noviembre del año 2000 se trasladó a la AFP HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A., entidad a la que actualmente se encuentra vinculada.

Se presenta como situación particular en el presente caso, que el Juez de Primera Instancia se apartó del criterio consolidado y reiterado que a propósito de la ineficacia de traslado de régimen pensional ha venido desarrollando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008.

En su lugar, consideró que en aplicación de la relatividad de los actos administrativos, COLPENSIONES es un tercero en el acto de traslado, por lo que ni legal ni constitucionalmente está obligado a responder, siendo los fondos privados los únicos garantes de las consecuencias benéficas o dañinas de dicho traslado, a más que quien genera un daño asume la obligación de responder al tener a su cabeza un encargo fiduciario que le obliga a brindar un buen consejo, por lo que al no haberse demostrado dentro del plenario que la AFP brindó una información clara, veraz y oportuna, y al no contemplar la legislación ninguna sanción por la falta de responsabilidad de las administradoras, pero si existir un principio universal que establece que quien cause un daño debe repararlo o indemnizarlo, dispuso declarar la ineficacia por inaplicación constitucional declarando a PORVENIR S.A. responsable profesionalmente debiendo subrogar la prestación en COLPENSIONES, una vez esta realice el cálculo actuarial a título de bono pensional, el cual debe cubrir la actividad financiera que va a asumir COLPENSIONES.

Conviene precisar, además, que si bien el Juez consideró que la ineficacia se producía por aplicación del artículo 272 de la ley 100 de 1993 y no por violación al deber objetivo de información, lo cierto es que la Sala considera que la norma que se debe aplicar sí es el artículo 271 de la ley 100 de 1993, la que resulta suficientemente clara en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva*

quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador".

Será en consecuencia bajo esa óptica que se analizará la situación, pues además así fue planteado desde el escrito de demanda teniendo como fundamento el desarrollo jurisprudencial ampliamente decantado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias como a continuación se verá.

Esa jurisprudencia ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de

proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Además, del interrogatorio de parte que le fuera practicado a la afiliada, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

De esa manera, se declarará la ineficacia del traslado efectuado por la señora MARÍA YANET AGUDELO GÓMEZ al RAIS, pero no con fundamento en la teoría de la inaplicación constitucional a la que acudió el Juez *a quo*, sino por incumplimiento al deber de información y en virtud de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993,

sin que sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

Ahora bien; el Juez de Primera instancia consideró además que la AFP PORVENIR S.A. tenía una responsabilidad profesional que asumir, por lo que le ordenó reconocer la pensión de vejez en los términos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida hasta tanto presentara solicitud de elaboración de cálculo actuarial con miras a subrogación pensional y procediera con su respectivo pago a COLPENSIONES.

Ante una decisión como la que se ha adoptado, entiende la Sala que se está vulnerando el principio de congruencia que debe existir entre la demanda y la sentencia, el cual impone a la autoridad el deber de resolver el litigio con estricta sujeción a los hechos y a las pretensiones. Si bien es cierto en ocasiones se permite al juez de instancia de fallar por fuera de lo pedido, lo que constituiría un fallo *ultra o extra petita*, para ello es necesario que se dé cumplimiento a estrictos lineamientos que en este caso no se configuran, pues ni en las pretensiones, ni en los hechos de la demanda, así como tampoco en los fundamentos de derecho, se menciona siquiera tal posibilidad y muchos menos se pretende de manera expresa el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de alguna de las entidades demandadas, por ello ni siquiera obra reclamación al respecto, por lo que en estricto sentido no existe un conflicto jurídico sobre este

asunto pues no se ha dado la oportunidad a las codemandadas de pronunciarse frente a ese tema ni surgen al interior del proceso los debates respectivos.

Es por lo anterior que la Sala entiende que el Juez de Primera instancia ha excedido sus facultades *extra petita*, al no cumplir con los requisitos de que esos hechos extraños debieron haber sido discutidos en el proceso, garantizando el derecho de defensa y menos que fueran probados para otorgar el derecho en esas condiciones.

Así, se REVOCARÁ por faltar al principio de legalidad el reconocimiento de la pensión de vejez ordenado, además de la obligación impuesta a PORVENIR S.A. de realizar el cálculo actuarial y la posterior subrogación pensional a COLPENSIONES en caso de que se pudiera dar, pues no es propia esta obligación de la AFP y la normatividad especial de seguridad social sólo consagra la misma para los empleadores que no afiliaron al sistema o fueron tardíos en hacer la afiliación.

En su lugar, se dispondrá, como efecto natural de la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado del RPM al RAIS, que PORVENIR S.A. proceda a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de los aportes recibidos con ocasión de la afiliación de la demandante a esa entidad, con los respectivos rendimientos financieros que se hallen en la cuenta de ahorro individual, así como las cuotas de administración, porcentajes destinados a la garantía de pensión mínima y seguros previsionales, y a COLPENSIONES a recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación en las condiciones en que estaba hasta antes del traslado, es decir, sin que exista solución de continuidad en la afiliación.

A esa conclusión se llega teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el

estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.” (Resaltado por la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque

llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al

estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Tampoco es procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

No son más los temas para resolver. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Medellín el 31 de marzo de 2022 y en su lugar dispone:

1) DECLARAR la ineficacia del traslado de la señora MARÍA YANET AGUDELO GÓMEZ del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, realizado a COLPATRIA S.A. (hoy PORVENIR S.A.) el 14 de abril de 1997 por violación al deber de información;

2) ORDENAR a PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, el valor existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante, así como los rendimientos financieros y sin descontar suma alguna por cuotas de administración, porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima;

3) ORDENA a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas, incluirlas en la historia laboral como semanas cotizadas y reactivar la afiliación de la demandante a esa entidad, sin solución de continuidad.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0e5d1322e9e9112010b0a8c095c1af1dc7c677b05a9912d236d3295002a36c28**

Documento generado en 01/12/2022 02:52:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>